



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-014-2015-01321-01 (O2-22-257)
Accionante: JAIME ALBERTO PULGARÍN VEGA
Accionada: COLPESIONES E.I.C.E., POSITIVA S.A., JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA Y UGPP
Procedencia: JUZGADO VEINTICINCO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA No. 0026
Asunto: PENSIÓN DE INVALIDEZ – RELIQUIDACION INDEMNIZACIÓN

En Medellín, a los seis (06) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-014-2015-01321-01 (O2-22-257), instaurado por JAIME ALBERTO PULGARÍN VEGA en contra de COLPESIONES E.I.C.E., POSITIVA S.A., JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA Y UGPP, con el fin de resolver el Recurso de Apelación impetrado por la parte demandante, respecto de la sentencia que selló la primera instancia, proferida el 14 de julio de 2022 por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “[p]or medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

1. ANTECEDENTES

El señor JAIME ALBERTO PULGARÍN VEGA actuando a través de apoderado judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de COLPENSIONES E.I.C.E. y POSITIVA S.A.,

en procura de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a partir del 09 de noviembre de 1981, junto con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación y las costas. Así también de manera subsidiaria reclamó la reliquidación de la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez de origen laboral que le fuera reconocida previamente.

En respaldo de sus aspiraciones señala que nació el 16 de febrero de 1958, alcanzando a la data de presentación de la demanda, la edad de 57 años de edad. Agrega que se encuentra afiliado al SGSS a través de COLPENSIONES E.I.C.E., donde ha cotizado un total de 776,71 semanas por el periodo comprendido entre el 22 de junio de 1978 y el 31 de enero de 1999. Indica que el entonces Instituto de Seguros Sociales a través de la Resolución 03130 del 05 de agosto de 1983, le reconoció la suma de \$41.040 por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez, teniendo en cuenta una PCL del 20%, 12 semanas de cotización y una IBC igual a \$7.547,19. Cuenta que se sometió a un nuevo dictamen de PCL el 14 de septiembre de 2013 ante la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia, entidad que a través del médico en Salud Ocupacional, doctor José William Vargas Arenas, determinó cuantificar la PCL en un 45,34%, de origen laboral y fijando el 09 de septiembre de 1981 como fecha de estructuración.

Puso de presente que, apoyándose en el nuevo dictamen de PCL, solicitó a la demandada POSITIVA S.A., el 28 de marzo de 2014 y el 02 de mayo de esa misma anualidad, el reconocimiento de la pensión de invalidez; peticiones que fueron negadas en comunicados del 10 de abril y del 16 de mayo de 2014, bajo el supuesto que en las dependencias de esa entidad no contaban con la documentación referente al evento que se solicita; que el 24 de junio de 2015, presentó reclamación administrativa ante COLPENSIONES E.I.C.E., considerando que le asiste derecho a sus aspiraciones, conforme a lo normado en el Acuerdo 155 de 1963, aprobado por el Decreto 3170 de 1964.

1.1. Trámite de primera instancia

La demanda se admitió el 23 de octubre de 2016 (doc.04, carp.01), y se notificó a las demandadas COLPENSIONES E.I.C.E. y POSITIVA S.A. el 06 de noviembre de 2015 y el 20 de enero de 2016, respectivamente (docs.05 y 09, carp.01), dándose aviso de la existencia del presente proceso a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el 17 de noviembre de 2015 (doc.06, carp.01). De igual manera, se vincularon a la actuación la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, en lo sucesivo, JRCIA y la UGPP (docs.14 y 27, carp.01).

COLPENSIONES E.I.C.E. y POSITIVA S.A., al momento de dar respuesta al escrito incoativo aceptaron como ciertos los hechos que hacen referencia a la fecha de nacimiento del demandante, el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez, las reclamaciones que fueran presentadas y la subrogación en materia de riesgos laborales entre el ISS y POSITIVA S.A.; a los demás hechos respondieron que no les constaban. Es así que la administradora del RPMPD se opuso a la prosperidad de las pretensiones, proponiendo en su defensa la excepción dilatoria de falta de legitimación en la causa por pasiva, y, como de mérito, las que postuló como inexistencia de la obligación de reconocer y pagar pensión de invalidez por ser de origen profesional, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, prescripción, compensación y pago, imposibilidad de condena en costas, buena fe de Colpensiones, y la innominada. La sociedad POSITIVA S.A., invocó las que nominó como inexistencia del derecho e inexistencia de la obligación, ausencia de causa para demandar, enriquecimiento sin causa, compensación, prescripción y la genérica (doc.08, carp.01; págs.22 a 75; doc.11, carp.01).

La UGPP también planteó oposición a las reclamaciones impetradas en su contra. Frente a los hechos en los que estas se fundan, adujo como ciertos los que hacen referencia a la edad del demandante, el pago de la indemnización sustitutiva y las funciones atribuidas a POSITIVA S.A.; sobre los restantes supuestos fácticos manifestó no constarle. Presentó como excepciones de mérito las que denominó como falta de legitimación en la causa por pasiva, falta de legitimación en la causa por inexistencia de sucesión procesal, improcedencia de intereses moratorios, imposibilidad de condena en costas y prescripción (págs.01 a 21, doc.11, carp.01).

A su turno, la JRCIA luego de tener por cierto la edad del accionante y la indemnización que le fuera reconocida, se opuso a la prosperidad de los pedimentos con la formulación de las excepciones de legalidad, eficacia y obligatoriedad del dictamen, y la prescripción (doc.36, carp.01).

1.2. Decisión de Primera Instancia

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 14 de julio de 2022 (doc.40, carp.01), mediante sentencia proferida por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín, en la que resolvió absolver a las convidadas a juicio de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por parte del señor JAIME ALBERTO PULGARÍN VEGA, no sin antes declarar probados los hechos sustento de las excepciones de inexistencia de la obligación de reconocer y pagar pensión de invalidez enfiladas por COLPENSIONES E.I.C.E. e inexistencia del derecho y de la obligación elevadas por POSITIVA S.A.

Para sustentar su decisión, la cognoscente de primer grado luego de sostener que la disposición legal que regula la pensión de invalidez a la que aspira el demandante, es el Acuerdo 155 de 1963, aprobado por el Decreto 3170 de 1964, concluyó que aquel no reunió los requisitos necesarios para la prosperidad los pedimentos, particularmente en lo que al porcentaje de la PCL y el origen de las patologías respecta.

Prosigue indicando que, no le merece credibilidad el dictamen pericial allegado con el escrito demandatorio, recalcando que las condiciones de salud que allí fueron tenidas en cuenta, *verbi gratia*, la amputación parcial del dedo índice, ocurrieron de manera posterior al año 1981, lo que no le ofreció certeza ni convicción para así disponer que la PCL del demandante para esa anualidad, debía ser modificada (minuto 01:14 a 29:37, doc.94, tercer hipervínculo, carp.01).

1.3. Recurso de Apelación

El procurador judicial del señor JAIME ALBERTO PULGARÍN VEGA, inconforme con la decisión interpuso recurso de apelación, a fin de que se revoque la decisión adoptada en la primera instancia, para en su lugar, se acceda a los pedimentos consignados en los acápites pertinentes del libelo genitor. Para los anteriores propósitos, luego de recordar los requisitos contenidos en el Acuerdo 155 de 1963, y el reconocimiento de la indemnización de la que fue objeto al obtener en el año 1981 una PCL igual al 20%, insiste que deben acogerse las conclusiones a las que se arribó en el dictamen pericial adosado con la demanda.

En línea con lo anterior, cuestiona la valoración efectuada por la universidad CES a través del médico Jaime Ignacio Mejía, pues el profesional no revisó la demanda ni los hechos en que se fundan los pedimentos, concluyendo así que la evaluación médica no es congruente con lo pedido, así tampoco ofrece motivos de certeza ni precisión. Finaliza su intervención invocando el principio de favorabilidad para otorgarle plenos efectos a la pericia allegada con la demanda. (minuto 29:40 a 37:26, doc.94, tercer hipervínculo, carp.01).

1.4. Trámite de Segunda Instancia

El recurso de apelación se admitió el 25 de julio de 2022 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 1° de agosto del mismo año (doc.03, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran los alegatos de conclusión por escrito, de considerarlo del caso.

El vocero judicial de POSITIVA S.A. (doc.04, carp.02), presentó las alegaciones pertinentes solicitando se confirme la decisión proferida por el a quo, dado que a su juicio y conforme con las probanzas allegadas *no hay fundamento de hecho ni de derecho para la prestación pretendida de manos de Positiva*; agregando que *[e]n todo caso ruego al Despacho validar, al desatar la alzada, que en todo caso hay ilegitimidad e incompetencia legal para mi mandante para conocer o atender alguna prestación asociada con el evento de 1981, pues desde el año 2015 el legislador previó que ese tipo de contingencias fuera asumida y defendida por la UGPP, por cuenta de lo señalado en la Ley 1753, artículo 81, Siendo (sic) el objeto del litigio, definido así desde la primera audiencia de trámite, el de determinar tanto el origen como el porcentaje real de pérdida de capacidad laboral para acreditar factualmente la existencia de derecho de pensión de invalidez, o no.*

La UGPP a través de su apoderada judicial asentó la necesidad de confirmar la sentencia impugnada, al señalar:

Las patologías evaluadas en la historia clínica actualizada del demandante que en efecto permiten un incremento de la pérdida(sic) de la capacidad laboral, incluso superior al 50% que la Ley(sic) exige para imputar la calidad de invalido(sic), obedecen a enfermedades y afecciones de origen común (lumbalgia(sic), degeneración de columna leve). No existen eventos traumáticos relacionados con el trabajo o accidente que en su momento sufrió el demandante.

Los eventos determinantes para la estructuración de la invalidez (lumbalgia, infarto cerebral, degeneración leve de columna son ajenos a la actividad, laboral y accidente sufrido por el actor, por lo que la estructuración de la invalidez medicamente no puede ser anterior a dichos sucesos; véase como de la practica(sic) probatoria se concluye que antes del mes de septiembre de 2021 la afección de la columna y tobillo alegada no le hubiesen permitido al actor la obtención de una pensión de invalidez.

Mediante resolución No. 03130 del 5 de agosto de 1983, el iss concedió al actor una indemnización sustitutiva de pensión de invalidez de ORIGEN PROFESIONAL, en cuantía de \$41.040.00, basada en 12 semanas cotizadas, salario base de \$7.547.19, y una incapacidad parcial del 20%, por lo que la valoración con ocasión al accidente de trabajo del cual no se ofrece detalles en las pruebas aportadas, en su momento fue valorado por el iss arl determinando el porcentaje conocido y la prestación que por ley corresponde. Si bien se aporta un dictamen al proceso con una estructuración del 09 de noviembre de 1981, tal y como lo indicó el perito traído al proceso de manera oficiosa, el mismo resuelta(sic) escueto, sobrevalorado, sin una asociación causal que permita sin lugar a dudas señalar que el accidente sufrido degenera una pérdida de capacidad laboral superior a la en su momento valorada por el ISS.

No se encontró un porcentaje superior al asignado por el entonces ISS que permitiese hablar de una reliquidación pensional.

El poderhabiente judicial de COLPENSIONES E.I.C.E, solicitó la confirmación de la determinación dispensada en primera instancia, sin ofrecer mayores argumentos.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor JAIME ALBERTO PULGARÍN VEGA, advirtiéndose que, de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio de la sentencia impugnada se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

2.1. Problema jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a establecer si al señor JAIME ALBERTO PULGARÍN VEGA le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez a partir del 09 de noviembre de 1981, o de manera subsidiaria, la reliquidación de la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez que fuera pagada con antelación por el ISS, efecto para el que será necesario establecer cuáles son los requisitos que el afiliado debe acreditar para la causación y disfrute de la referida prestación, con arreglo a las premisas normativas y criterios jurisprudenciales que rigen la materia. Asimismo, la Sala se ocupará en determinar en el asunto puesto a la palestra, la validez y eficacia del dictamen de PCL traído con la demanda como sustento cardinal de los pedimentos y conforme a los principios que informan la sana crítica.

2.2. Sentido del Fallo

La Sala confirmará decisión de primer grado, considerando que el promotor no demostró con la debida suficiencia que para el año 1981, se encontraba en estado de invalidez con una PCL superior al 20%, así tampoco el origen laboral de las patologías que padece, a la par que, como resultado del ejercicio de la libre formación del convencimiento en la apreciación de la prueba pericial allegada con la demanda, se desestimó la capacidad demostrativa de este medio de convicción, no habiendo por tanto mérito para diferir el reconocimiento de la prestación económica recabada a su favor por el entonces Instituto de Seguros Sociales.

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de

los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la litis planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: que JAIME ALBERTO PULGARÍN VEGA nació el 16 de febrero de 1958 (pág.22, doc.02, carp.01; págs.13 y 132, doc.36, carp.01), que durante el periodo del 22 de junio de 1978 al 31 de enero de 1999 cotizó un total de 776,71 semanas en el RPMPD administrado por COLPENSIONES E.I.C.E. (págs.23 a 25, doc.02, carp.01); que el entonces Instituto de Seguros Sociales en Resolución 03130 del 05 de agosto de 1983, le reconoció una indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez de origen profesional por valor de \$40.040, liquidación que se basó en 12 semanas cotizadas, una incapacidad parcial del 20% y la suma de \$7.547,19 como salario (págs.6 a 7, doc.02, carp.01; págs.30 a 31, doc.36, carp.01); que el 09 de mayo de 2000 sufrió un accidente mientras estaba cargando una mezcladora, resultando afectados el tórax, caderas, muslos y piernas (pág.32, doc.36, carp.01).

2.3.1 De la Pensión de Invalidez

El Sistema Integral de Seguridad Social fue concebido como *“el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, a disposición de las personas y la comunidad entera para garantizar un nivel de calidad de vida digna, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar cobertura integral a todas las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad”* (Ley 100 de 1993, Preámbulo).

El Sistema General de Pensiones, fue a su vez diseñado para garantizar a la población colombiana el amparo ante las contingencias de vejez, invalidez y muerte, reconociendo para ello una prestación económica denominada pensión, otorgada por la entidad administradora del régimen al que se hubiere vinculado el afiliado, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por el régimen que resulte aplicable a cada afiliado (artículo 1º de la Ley 100 de 1993).

Ahora, en lo que concretamente concierne al fin último de la prestación económica que se deriva del riesgo de invalidez con ocasión a la materialización de una contingencia de origen común ora de origen laboral, la Sala de Casación Laboral Corte Suprema de Justicia ha puntualizado en sentencias SL3275 de 2019 y SL3873 de 2022 que, aquella está “*destinada a cubrir las contingencias generadas por la enfermedad o el accidente que inhabilitan al afiliado para el ejercicio de la actividad laboral. En ese sentido, su fin es garantizar a la persona que ve disminuida su capacidad para trabajar, un ingreso que le permita asegurar todas sus necesidades básicas, así como el de las personas que se encuentran a su cargo*”; previo, desde luego, al cumplimiento de los requisitos legales establecidos para su causación y disfrute.

En ese orden, es de precisar que el legislador no previó un régimen de transición en la prestación pensional por invalidez, como si lo estableció para la de vejez en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; sin perjuicio, claro está, del principio constitucional de la condición más beneficiosa, el cual admite, de manera excepcional y bajo condiciones específicas, acudir a la normativa inmediatamente anterior que gobernaba el reconocimiento de la prestación, como bien lo ha explicado de manera reiterada la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias SL2358 y SL4650 de 2017.

Conforme con lo antes dicho y como corolario, diáfano se exhibe qué, por regla general, las disposiciones legales de seguridad social que resultan aplicables para resolver el reconocimiento de esta prestación de invalidez corresponden a aquellas que se encuentren en vigor a la fecha de estructuración de este estado, acogiendo así las reglas de aplicación inmediata de la ley y el efecto retrospectivo propio de las normas de seguridad social.

Así, para que el juez brinde una solución a la cuestión litigiosa, es deber, *prima facie*, identificar de manera clara, la existencia y vigencia de la normativa que resulte aplicable a la prestación económica por invalidez y de esta forma verificar la observancia de los requisitos establecidos en ella, para determinar además de la calidad de beneficiario del afiliado, la fecha de causación y disfrute de la pensión solicitada.

Bajo estas directrices, memora la Sala que en el *sub lite* el señor JAIME ALBERTO PULGARÍN VEGA funda el reconocimiento pensional y en general, la titularidad de los derechos de contenido económico que persigue, en el dictamen de PCL aportado desde la presentación del libelo demandatorio (págs.08 a 15, doc.02, carp.01), el cual fijó como fecha de estructuración del estado de invalidez el 09 de noviembre de 1981, lo que de suyo comporta que, las reglas para determinar la existencia del derecho a la pensión de invalidez, en principio, se encuentran

contenidas, para el caso del RPMPD en el Acuerdo 155 de 1963, aprobado por el Decreto 3170 de 1964¹, que contiene las reglas vigentes a la fecha presunta de estructuración del estado de invalidez del accionante.

En aplicación de las reglas que gobiernan las aspiraciones del pretensor, es menester para la prosperidad de las mismas, la demostración en juicio de las siguientes condiciones: i. haber sufrido un accidente de trabajo o padecer una enfermedad laboral (artículos 1 a 6, Acuerdo 155 de 1963, aprobado por el Decreto 3170 de 1964²); y ii. padecer una incapacidad permanente parcial de origen profesional en cuantía superior al 20% (artículo 24³, Acuerdo 155 de 1963, aprobado por el Decreto 3170 de 1964).

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL13545 de 2014, reiterada en la SL377 de 2019, puntualizó que, en vigencia del Decreto 3170 de 1964, el ISS *exigía una pérdida de capacidad laboral de más del 20%*; agregando que el reconocimiento de la prestación económica se encuentra supeditado a la existencia de un *concepto técnico científico para determinar si debía reconocerse una pensión de invalidez a aquellas personas que se encontraban dentro de los porcentajes que en su momento regían*.

Así, meridiana asoma la trascendencia que reviste la determinación de la PCL en la definición judicial de la prestación por invalidez, al punto que, en ausencia de esta o ante su descalificación ante el juzgador, necesariamente la decisión resultará adversa a los intereses del afiliado.

² **Artículo 1.** De acuerdo con lo dispuesto en la ley 90 de 1946 El instituto colombiano de seguros sociales ASUME el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. **Artículo 2.** Para los efectos de este reglamento se considerará accidente de trabajo, todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca una lesión orgánica o perturbación funcional. **Artículo 3.** Se considerará también accidente de trabajo el que sobrevenga al asegurado: a) En la ejecución de órdenes del patrono o en la prestación de un servicio bajo la autoridad de este aún fuera del lugar y horas de trabajo; b) En el curso de una interrupción del trabajo, si la víctima se halla en los locales de la empresa, o en los lugares de trabajo; c) Por acción de tercera persona o por acto intencional del patrono o de un compañero de trabajo, durante la ejecución de este y por causa o con ocasión del trabajo. En estos casos se estará a lo que dispone el artículo 84 respecto a la responsabilidad y al resarcimiento del daño según el artículo 216 del código sustantivo del trabajo, o según el derecho común; d) El ocurrido en el camino al lugar de trabajo o de regreso del trabajo, cuando el transporte se haya efectuado por cuenta del patrono, en un vehículo propio o contratado expresamente por este. **Artículo 4.** No se considerará accidente de trabajo para efectos del presente Reglamento: a) el que fuere provocado deliberadamente por la víctima o por sus causa-habientes, o el que fuere consecuencia de un acto delictuoso del que la víctima fuera el responsable directa o indirectamente; b) El que fuere producido por culpa grave de la víctima, considerándose igualmente como tal, entre otras, la desobediencia deliberada de órdenes expresas, el incumplimiento manifiesto e intencional de las disposiciones del reglamento de prevención de riesgos, y la embriaguez o cualquier otra forma de toxicomanía o de narcosis. Sin embargo, en estos casos, el Instituto estará facultado para conceder las prestaciones del seguro de riesgos profesionales en la extensión y en las condiciones que se señalan en el artículo 44 de este reglamento; c) El que se debe a fuerza mayor conforme a la definición del Código Civil. **Artículo 5.** Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por Enfermedad Profesional todo estado patológico que sobrevenga como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el asegurado o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos. Las enfermedades endémicas o epidémicas de la región sólo se consideran como profesionales cuando se adquieren por los encargados de combatir las en razón de su oficio. **Artículo 6.** Para efectos de la clasificación de las enfermedades profesionales, el Instituto adoptará por medio de Acuerdo del Consejo Directivo, una Tabla de Enfermedades Profesionales, cuya elaboración estará a cargo del Departamento de Medicina Preventiva e Investigaciones Médicas, la que comprenderá todas las enfermedades o lesiones que se ciñan a la definición de enfermedad profesional. La tabla de enfermedades profesionales será revisada cada cinco (5) años.

³ **Artículo 24.** El asegurado que quede con una incapacidad permanente parcial entre el 5 y el 20%, tendrá derecho a que se le pague en sustitución de la pensión, una indemnización en capital equivalente a dos (2) anualidades de aquella. Las pensiones correspondientes a una reducción de capacidad de trabajo superior al 20% no podrán pagarse en forma de capital. La incapacidad permanente parcial inferior al 5% no es indemnizable

2.3.1.2. La calificación de la pérdida de capacidad laboral: De manera reiterada, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia⁴, ha admitido la validez y eficacia de los dictámenes proferidos por las juntas calificadoras, aun cuando la contingencia, entiéndase, enfermedad o accidente, haya tenido lugar en una época anterior a la vigencia de la Ley 100 de 1993, y, reglada por premisas normativas, como lo es, el Decreto 3170 de 1964. Al respecto la Alta Corporación sostuvo:

El artículo 24 del Decreto 3170 de 1964 definió pensiones graduables, según la incapacidad, e indemnizables aquellos que tuviese incapacidades inferiores al 20%; aunque los artículos 62 y 63 del Decreto Ley 433 de 1971 nivelaron los porcentajes de los riesgos comunes y profesionales, el Seguro Social mantuvo la aplicación del referido Decreto 3170 con el otorgamiento de pensiones en la forma diferencial, al que luego retorna el Decreto 1650 de 1977, conforme su artículo 102, en tanto previó la pensión de invalidez en porcentaje superior al 20, y allí sin duda se advierte la primera equivocación jurídica del juzgador de segundo grado.

Aunque las pensiones por invalidez originadas en el trabajo eran concedidas provisionalmente por el término de dos años, luego de los cuales tenían el carácter de definitivas, estaban sujetas a revisión si se consideraba que habían cambiado las condiciones en su otorgamiento. Tal situación es lo esperable, si se comprende que el objetivo del aseguramiento a través de cualquiera de los sistemas de protección de los riesgos, debe contribuir al mejoramiento integral de los individuos y que el déficit en el sistema de los seguros sociales, en punto a la declaratoria de la invalidez, también se ha originado en el abandono de aspectos tan necesarios como la reeducación profesional del inválido o su reclasificación en el mercado del trabajo, que era lo que se propugnaba desde el inicio de la legislación, solo que sin mayor aplicación.

Al cotejar el anterior esquema con el insertado por la Ley 100 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios, lo que se advierte es que se mantuvo un carácter técnico científico sobre la valoración completa del estado de salud, incluso bajo mayores estándares de razonabilidad se sujetó al dictamen a un concepto de integralidad, en el que se tuviere en cuenta i) la voluntad, esto es si existe en el individuo la posibilidad de gobernar, escoger o motivar, ii) la habituación que organiza los hábitos y las rutinas y iii) la ejecución a partir del cual se estudian las estructuras utilizadas para producir el desempleo ocupacional.

El artículo 2 del Decreto 917 de 1999, que corresponde al Manual Único de Calificación, considera inválido a quien hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral, y define como incapacidad permanente parcial la que se encuentra entre el 5 y el 50%. En contravía a lo afirmado por el Tribunal, en esta nueva concepción de la evaluación también se ponderan las habilidades, destrezas, aptitudes, potencialidades de orden físico, mental y social e incluso para la definición de la fecha de la estructuración de invalidez, debe contar las Juntas de Calificación con los insumos necesarios, como historias clínicas, exámenes y demás.

(...)

La anterior reseña es indispensable para concluir la equivocación del Tribunal al restarle eficacia al dictamen emitido por la Junta de Calificación de Invalidez, fundado en que la actual medición es cuantitativa y no cualitativa, pues como se anotó en ambos modelos la evaluación del daño sufrido por el accidente de trabajo y las consecuencias que del mismo emanan, se nutren de diversos componentes.

⁴ SL13545 de 2014.

Admitir la tesis del Tribunal, sobre la falta de eficacia del dictamen de la Junta de Calificación, supondría que las Juntas solo estuviesen habilitadas para declarar la pérdida de la capacidad laboral desde que entró en vigencia la Ley 100 de 1993 que fue la que las creó en sus artículos 42 y 43, cuando ese no fue su propósito; por el contrario, la aspiración fue elevar el nivel técnico de calificación y adecuar el mismo a las nuevas tendencias de seguridad social, al punto que se adoptó el referido Manual, basado en criterios de la OMS.

Esa postura, además dejaría huérfanos de protección a todos aquellos con afectaciones a su salud en ese periodo, con lo que se desconoce que la disminución de la capacidad laboral trae consigo la consecuente imposibilidad de obtener una remuneración suficiente, que permita al sujeto resolver sus necesidades básicas y acceder a los programas de reeducación y readaptación profesional. -Subrayado intencional de la Sala-

En lo que respecta a este tópico, es del caso señalar que el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, reza que *[c]orresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos [Laborales] – AR[L]-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias; pudiendo acudir a las juntas regionales de calificación de invalidez y a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en el evento en que uno de los interesados, bien que, fuese la persona calificada o sus beneficiarios en caso de muerte, la Entidad Promotora de Salud, la Administradora de Riesgos Laborales, la Administradora del Fondo de Pensiones o Administradora de Régimen de Prima Media, el empleador o la compañía de seguro que asuma los riesgos de invalidez, sobrevivencia y muerte, si se presentara disenso frente a la fecha de estructuración de la contingencia, su origen o el porcentaje de la PCL asignado; aclarando la Sala que, en últimas y como se antelara, las controversias que se suscitan en relación con los dictámenes en firme, emitidos por los organismos calificadores, se dirimen por la justicia ordinaria (artículo 44 del Decreto 1352 de 2013).*

En ese orden de ideas, el dictamen emitido por las juntas de calificación de invalidez no pueden ser prueba única, solemne o tarifada para determinar la pérdida de la capacidad laboral, pues tal y como lo ha reiterado el órgano jurisdiccional de cierre, el citado dictamen “... *no es más que un experticio que la ley estableció debía ser practicado por determinados entes, lo cual difiere claramente de lo que es una prueba solemne*” (CSJ SL-24392 del 29-06-2005, SL31062 del 18-03-2009, SL-35097 del 06-03-2012, SL-351 del 15-05-2013, Radicado 37616, SL-5622 del 09-04-2014, Radicado 52072, y SL-42451 de 2016, SL-877 del 26-02-2020, Radicado 73738, SL-2756 del 29-07-2020, Radicado 72895); línea jurisprudencial en la que además se reiteró que “...*al no estar en presencia de un medio probatorio solemne, al Juzgador de alzada le era permitido, conforme a la potestad de apreciar libremente la prueba, acoger aquellos elementos de convicción que le den mayor credibilidad o lo persuada mejor sobre cuál es la*

*verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso, en atención a lo previsto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”; precisando en sentencias SL877 de 2020 y SL2568 de 2020 que, si el juez, para definir una determinada controversia, se ve enfrentado a dos dictámenes disímiles, **podrá escoger para fundamentar su decisión aquél que le merezca mayor credibilidad**, todo, se insiste, dentro del marco de libertad probatoria que le asiste de conformidad con los artículos 51, 54 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. -Negritas intencionales de la Sala-*

De igual forma, la jurisprudencia laboral también ha sido pacífica y reiterativa al indicar que aunque los jueces del trabajo tienen plena competencia y aptitud para examinar los hechos que estructuran la invalidez calificada, a fin de resolver las controversias que los interesados formulen al respecto *“Ello, por supuesto, no llega hasta reconocerle potestad al juez de dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si el trabajador está realmente incapacitado o no y cuál es la etiología de su mal, como tampoco cuál es el grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de las deficiencias, discapacidades y minusvalías”* (CSJ SL del 19-10-2006, radicado 29622, SL-16374 del 04-11-2015, radicado 53986SL-5280 del 31-01-2018, radicado 76993, SL-1044 del 20-03-2019, radicado 68074, y SL2349 del 28-04-2021, radicado 83859).

Desde esa perspectiva, al ponderar la Corte Suprema de Justicia las conclusiones de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral, sostuvo que el juez *“... debe comprender el tema probatorio, primero, desde el perfil científico que lo identifica y distingue, y luego interiorizarlo, arropándolo con el manto jurídico y las consecuentes derivaciones, que provocará la sentencia, sin olvidar que la potencial relevancia de la prueba científica para esclarecer el hecho o para establecer la convicción sobre la verdad del hecho, no es desde luego absoluta [...] No se le puede pedir al Juez que posea una sapiencia igual o superior a la del perito, por lo que el control de la prueba, debe realizarse mediante el análisis del grado de aceptabilidad de los conocimientos entregados o por la racionalidad del procedimiento y conclusiones, ponderando con cautela y guiándose por el esquema racional que le permitirá, a través de las reglas de la sana crítica, calibrar y establecer el mérito del medio persuasivo.*

Recuérdese al efecto que, como lo ha dicho la Corte, “es la propia ley la que a esa función le señala confines, imponiendo el razonamiento del análisis respectivo, así como el deber de considerar la firmeza, la precisión y la calidad de los fundamentos del dictamen y los demás elementos probatorios que obren en el proceso (artículos 187 y 241 del CPC), luego la mencionada autonomía no puede ser convertida en arbitrio por defecto, ya que la actitud del juez, frente a la prueba, jamás podrá ser pasiva sino, muy al contrario, dinámica, activa y acuciosa” (CSJ SC-Sentencia del 02 de agosto de 2002, radicación 6148).

El estudio de la contradicción de la prueba por error grave se justifica en aquellos casos en que aparezca con notoriedad que el perito no aplicó su propio discernimiento, omitió o utilizó reglas distintas del conocimiento, no vio, supuso o cercenó la materia del dictamen” (CSJ SC-7817 del 15-06-2016, Radicado 11001310303420050030101).

2.3.4 Del Caso Concreto

Revisados entonces los medios de convicción que fueran arrimados al plenario, puede afirmar esta Sala de Decisión, sin hesitación alguna, que la decisión adoptada por la juzgadora de instancia goza de presunción de acierto y legalidad, toda vez que, según los principios que informan la sana crítica, descartó la capacidad demostrativa del dictamen pericial allegado con el escrito inaugural, de acuerdo con los demás medios de prueba practicados, fundando su convicción en aspectos tan trascendentales como necesarios, en lo atinente a: **i.** la acreditación del profesional, entiéndase, el grado académico, objetividad y profesionalidad; **ii.** los procedimientos, estándares o métodos científicos utilizados para la valoración; **iii.** el insumo o elementos materiales a los que se acudió para emitir el concepto solicitado, y; **iv.** las condiciones en que fue valorado el estado de salud del paciente.

Como sustento de lo anterior, en la contienda judicial, además de la evaluación de salud allegada por el pretensor (págs.8 a 15, doc.02, carp.01), fueron adosados los siguientes documentos: formulario del 23 de abril de 2012, para solicitud de calificación ante Seguros ALFA (pág.6 a 7, doc.36, carp.01); solicitud de valoración por invalidez del 24 de febrero de 2012 ante la AFP PORVENIR S.A. (pág.11 a 12, doc.36, carp.01); historia clínica (págs.14 a 19, 22 a 28, 33 a 115, doc.36, carp.01); dictamen de PCL emitido por Seguros de Vida ALFA SA el 20 de marzo de 2012 (págs.20 a 21, doc.36, carp.01); dictamen de PCL No. 40715 del 26 de junio de 2012, expedido por la JRCIA (págs.120 a 129, doc.36, carp.01); y dictamen de PCL del 22 de abril de 2022, rendido por la Universidad CES (doc.51, carp.01), documentales que al no ser desconocidas ni tachadas de falsas, dan fe de lo allí consignado.

Es así que se tiene que el demandante, fue calificado en primera oportunidad por la compañía asegurador ALFA S.A., por las patologías de *síndrome doloroso de columna* y *rigidez de tobillo*, que fueron determinadas como de origen común, arrojando una PCL del 27,55% y como fecha de estructuración, se fijó el 09 de febrero de 2012. *A posteriori*, ante la inconformidad del aquí demandante, la JRCIA el 26 de junio de 2012, en dictamen No. 40715 confirmó integralmente el resultado de la evaluación practicada en primera oportunidad; enfatizando la Sala que, el organismo calificador basó su valoración en el Decreto 917 de 1999 y en los siguientes documentos: **a.** acto administrativo del 30 de marzo de 1983 por el cual se reconoce una

prestación económica; **b.** rayos x de calcáneo izquierdo, 06/03/2008: en la proyección lateral se identifica alteración en la morfología normal del calcáneo; **c.** TAC de columna lumbo-sacra, 14/10/2010: Se identifica anterolistesis de L5 sobre S1 grado I. Disminución en la amplitud del foramen de emergencia radicular en el segmento L4-L5 secundaria a la anterolistesis; **d.** neurología, 20/01/2011: paciente con cuadro de dolor lumbar no mejoría con infiltraciones; **e.** resonancia nuclear magnética de columna lumbosacra simple, 08/03/2011: Paciente con cuadro de dolor en región lumbar refiere aumento de la debilidad en miembros inferiores persiste el dolor en cara lateral de pierna derecha, con calambres; **f.** RM columna lumbosacra, 16/03/2011: Hay disminución intensidad de señal de los discos intervertebrales L3-L4, L4-L5 y L5-S1 por deshidratación, y; **g.** rayos x de columna lumbosacra, 17/03/2011: Se ve pequeño deslizamiento hacia atrás del sacro en relación con el eje de L5 lo cual corresponde a una espondilolistesis grado I.

A su turno, en el acápite de la valoración interdisciplinaria el ente calificador consignó: [p]aciente con lumbagos de 15 a 20 años de evolución, atribuye la enfermedad antecedente de accidente de trabajo el 09 de noviembre de 1981. Ahora tiene la columna desviada y tiene una disimetría de 03 cm. Al examen físico: Con anquilosis en neutro del tobillo izquierdo. Columna vertebral: palpación no dolorosa, movilidad conservada. Extremidades superiores con movimientos normales, motivos por que llevaron a razonar que con los fundamentos de hecho y derecho expuestos considera que el paciente tiene los diagnósticos antes anotados sin criterios para aumentar los porcentajes otorgados, por cuando la calificación le tuvo en cuenta sus secuelas bajo los parámetros establecidos en el decreto (sic) 917 de 1999, incluyéndole el síndrome doloroso de columna y la anquilosis del tobillo; además de todas sus discapacidades y minusvalías. Precizando que al síndrome doloroso de columna se está presentando por una enfermedad degenerativa que no es posible se produzca en un accidente de trabajo por lo que no hay criterio para modificar el origen. En cuanto a la fecha de estructuración, dado que se está informando que es un proceso degenerativo, tampoco hay criterio para modificar dicha fecha. -Subrayado intencional de la Sala-

Por su parte, no soslaya la Sala que, la prueba pericial en la que de manera axial se apoyan las aspiraciones del accionante fue elaborado por el también médico especialista en medicina laboral y salud ocupacional, doctor José William Vargas Arenas, quien afirmó: [s]e observa que en el dictamen proferido por la Junta Regional no se tuvo en cuenta el trastorno psicológico presentado por el paciente. En la actualidad presenta una nueva deficiencia por la amputación parcial del índice derecho. Una vez evaluada la documentación aportada y el examen clínico del paciente, puede decirse que si bien el paciente presenta cuadro degenerativo de columna no puede decirse que la lumbalgia sea atribuida a ella sin tener en cuenta que la deficiencia producida por el tobillo ha alterado la marcha de manera considerable, y que además las

patologías presentadas por el trabajador han producido además un cuadro de depresión postraumática por lo que en consecuencia la pérdida de capacidad laboral actual del paciente debe considerarse de origen laboral (págs.08 a 15, doc.02, carp.01); determinado el origen laboral de las patologías que aquejan al accionante de anquilosis tobillo izquierdo (dolor fuerza alteración de la marcha), lumbalgia, amputación índice y depresión reactiva, con fecha de estructuración del 09 de noviembre de 1981 y con una PCL igual al 45,34%, discutiéndose así con esta valoración, además del origen del estado de invalidez, la cuantificación y su fecha de estructuración.

En cuanto al soporte documental acreditativo a la que acudió para llevar a cabo la valoración, destacó en la evaluación la Resolución 3130 de 1983, la historia clínica de seguro social y la EPS Sura, junto con el dictamen de la JRCIA del 26 de junio de 2012.

Ahora, en sede de instancia fue practicado segundo dictamen del 22 de abril de 2022 (doc.81, carp.01), rendido por la Universidad CES, en el que se dejó constancia que el accionante presentaba una PCL porcentual igual al 55% de origen común y tomando como fecha de estructuración el 20 de abril de 2022. En esta valoración el profesional de la medicina calificador concluyó que:

*De acuerdo con el manual de calificación de invalidez vigente para este caso – Decreto 1507/2014, su historia clínica, los conceptos de los especialistas tratantes, los diferentes estudios de laboratorio de imágenes, los elementos de hecho y de derecho y en cronología más recientes de septiembre de 2021 que han afectado mayormente su estado de salud, las normas técnicas de procedimiento, directrices del manual de calificación acorde con las capítulos y tablas respectivas, la valoración clínica realizada el pasado 20/04/2022, el archivo de imágenes y videos que se aportan para este expediente, el señor Jaime A. Pulgarín Vega, presenta una pérdida de capacidad laboral de 55%, que genera una invalidez, con fecha de estructuración al momento de esta valoración, esto es 20/04/2022, una vez agotado el tratamiento de rehabilitación física y ocupacional, su evolución en el tiempo (7 meses posteriores) por intolerancia del paciente a la misma decidió no seguirlas haciendo de carácter voluntario. **El origen:** Común de todas sus patologías, aclarando que las dolencias físicas de columna (lumbalgia crónica) y eje central del litigio en el tiempo, tienen un origen común por los cambios degenerativos osteoartrosicos multinivel asociado con su edad cronológica.*

Destacando como impresión diagnóstica **i. lumbalgia crónica con Espondilolistesis L5-S1; ii. hipertensión arterial; iii. hemiparesia de hemicuerpo izquierdo con signos de magnificación x antecedente de accidente cerebrovascular isquémico en sept 2021; iv. anquilosis de tobillo izquierdo, y; v. estenosis (carótidas)** (doc.81, carp.01).

En vista pública para efectos de la sustentación del dictamen pericial, el profesional de la medicina Jaime Ignacio Mejía Peláez, señaló que se desempeña como médico especialista en salud ocupacional, ejerciendo como perito médico y docente en la universidad CES en el tema

de capacidad laboral y daño corporal desde el año 2009, siendo esta su actividad laboral principal y diaria. Frente al caso particular del actor, afirmó que solo lo atendió y valoró para los propósitos del dictamen por practicar, teniendo en cuenta para su conclusión, la historia laboral que se le aportó en 24 folios, las ayudas diagnósticas, y la evaluación presencial del paciente, quien, en ese momento, presentó una nueva historia clínica, en donde se evidenció un accidente cerebrovascular isquémico para el año 2021. Como método al que acudió para la calificación, adujo que desarrolla un análisis de la historia clínica, y posteriormente se hace la valoración física del paciente; siendo que, una vez obtenido el resultado y el diagnóstico de las patologías, da aplicación al Decreto 1507 de 2014, para fijar el porcentaje de cada deficiencia. Insiste en afirmar que la patología de la lumbalgia no tiene relación de causalidad con la afección ni las secuelas que se derivaron del accidente laboral ocurrido en 1981, sino que por el contrario, son consecuencia del proceso degenerativo y evolutivo normal del ser humano, explicando con ello la espondilolistesis L5-S1 grado 1 osteocondrosis/espondilolisis L4, L5 S1 que sufre el señor JAIME ALBERTO PULGARÍN VEGA.

Adicional a ello, puso de presente que las anteriores condiciones médicas, no tienen origen laboral, además, por cuanto no hay evidencia de un evento de trabajo que las haya ocasionado, como lo es, una caída, reafirmando con ello que son producto de la edad y el proceso degenerativo normal de los seres humanos.

Refiere que conoció la afección del tobillo por la cual el ISS le otorgó una PCL igual al 20%, aclarando no obstante, que para esa fecha, el organismo de seguridad social manejaba una tabla donde no se encontraban todas las patologías, por lo que se asignaba el valor porcentual por analogía, precisando que bajo ninguna circunstancia esa lesión generaría un estado de invalidez, ni para la fecha en que fue valorado por el ISS ni en la actualidad, al punto que la PCL del 55% que fijó su valoración a partir del mes de abril de 2022, obedece al accidente cerebrovascular isquémico que el actor padeció en septiembre de 2021, de manera que, de excluirse esta circunstancia, el accionante no alcanzaría el estado de invalidez. En lo que refiere a la valoración aportada con la demanda, el profesional de la medicina instruye que los porcentajes allí estipulados carecen de evidencia de acuerdo con las tablas adoptadas en los manuales de calificación de la época, excluyendo con ello la patología de lumbalgia, por tener origen diferente al evento ocurrido en 1981, así como, el trastorno depresivo de adaptación, al ser consecuencia del dolor generalizado por la lumbalgia y no del accidente de trabajo valorado por el ISS, para así descartar el origen laboral de estas dolencias.

Finalmente, luego que por solicitud de la parte actora, se le pusiera de presente el escrito de demanda, se ratificó en la valoración entregada al juzgador, esto es, **a.** que antes del año 2021 el promotor no alcanza una PCL que lo ubique en condición o situación de invalidez; **b.** que no

existe evidencia para calificar con un porcentaje superior al adoptado por el ISS en el accidente sufrido por el demandante en 1981, y; **c.** la lumbalgia y el trastorno depresivo y de adaptación son de origen común y no guardan relación con el accidente de trabajo acaecido (minuto 10:57 a 01:55:35, doc.94, primer hipervínculo, carp.01; minuto 00:01 a 53:36, doc.94, segundo hipervínculo, carp.01).

Bajo esta perspectiva, se tiene que el compendio normativo llamado a reglar la valoración probatoria de los dictámenes periciales, se encuentra entre otros, en el artículo 232 del CGP, que enseña:

“Artículo 232. Apreciación del dictamen. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso”.

Significa lo anterior, que el juicio de admisibilidad y aun el grado de convicción de la prueba pericial, se encuentra determinada por la fiabilidad del ejercicio intelectual del experto, a la vez de la verificación de la existencia de criterios racionales y un nexo coherente y suficiente entre la valoración y la conclusión a la que llegó aquel; aspectos éstos que se muestran robustos y consistentes en el dictamen emitido por el médico especialista en salud ocupacional Jaime Ignacio Mejía Peláez. Ello, en atención a que ningún elemento de prueba tuvo la entidad suficiente para sopesar que las dolencias que hoy padece el señor JAIME ALBERTO PULGARÍN VEGA, particularmente la lumbalgia, la amputación del dedo índice y la depresión reactiva fueran consecuencia del accidente de trabajo ocurrido en 1981, que dejó como secuela la anquilosis en tobillo izquierdo del mencionado señor PULGARÍN VEGA, en tanto en cuanto, el médico José William Vargas Arenas no justificó con la exhaustividad, precisión y rigurosidad que se reclama en los procesos de esta naturaleza, el insumo, documento o cualquier otro instrumento al que acudió para afirmar que el proceso degenerativo de la columna del demandante es producto de la alteración en la marcha por la deficiencia del tobillo y no del proceso degenerativo normal y evolutivo del ser humano, así tampoco el criterio para incluir en su valoración eventos posteriores al año 1981 como lo es la amputación del dedo índice; aspectos que sí se contrastaron con lo expuesto por el médico Jaime Ignacio Mejía Peláez, quien de manera responsiva puso de presente las ayudas diagnósticas que permitieron descartar la afección en la movilidad del tobillo del actor como causa eficiente de la lumbalgia que aqueja al accionante.

Bajo este presupuesto irrefutable, no merece reproche alguno el ejercicio conclusivo vertido en la decisión hoy revisada, pues en la misma se plasmó de manera racional, con arreglo a lo

autorizado por los artículos 60 y 61 del CPTSS, los motivos por los que se desestimó el contenido del dictamen pericial adosado con la demanda, lo que dicho sea de paso, también comparte la Sala, sin que la insistencia del demandante en acceder a sus pedimentos con inadmisibles ligereza, sea directriz para variar lo que aquí se discurió.

Importa acotar que la observación del actor en lo que respecta a la falta de revisión del médico de salud ocupacional del escrito de demanda y sus pruebas previo a rendir el dictamen, tal cuestionamiento no compromete la claridad y precisión, no solo de la pericia sino también la sustentación del mismo; para lo cual basta con considerar que el perito fue claro y reiterativo en indicar que, de acuerdo con los medios de prueba que le fueron puestos de presente, no hubo mérito para asignar un porcentaje de PCL superior al determinado en el año 1983 por el ISS; recordando que el estado de salud actual del paciente debía ser valorado para así identificar si la lumbalgia y el trastorno depresivo y de adaptación que sufre el actor, es consecuencia del accidente de trabajo estructurado en época pretérita. De ahí que, constituye un contrasentido de la parte demandante, criticar la valoración del estado de salud actual, y pretender que, al mismo tiempo, sea tenido en cuenta por el sentenciador en el dictamen que se allegó con la demanda, en lo que estrictamente le favorece a sus intereses; reflexión que se opone a la valoración integral de los medios de prueba y por tanto debe ser desestimada.

De igual manera se desestima, por impertinente, la aplicación del principio de favorabilidad para así, privilegiar la capacidad demostrativa del dictamen allegado con la demanda sobre el que fuera practicado en el curso procesal, atendiendo que debe este principio, consagrado en los artículos 53 de la CP y 21 del CST, ser llamado a emplearse en aquellos casos en que surge duda en el juzgador sobre cuál es la normativa aplicable al momento de resolver un asunto sometido a su conocimiento, y al encontrar que dos o más textos legislativos vigentes al momento de causarse el derecho, gobiernan la solución del caso concreto; excluyendo con ello, el ejercicio de valoración probatoria que con las reglas de la libre formación del convencimiento, desarrolla el juez, quien puede fundar su decisión en los medios de prueba que le ofrezcan mayor persuasión de manera prevalente. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL5221 de 2021, adoctrino frente a este principio que:

i) su aplicación se restringe para aquellos eventos en que nazca en el juez una duda en la interpretación, es decir, si para él no existe, así la norma permita otras interpretaciones, no es obligatorio su empleo; (ii) los jueces no están obligados en todos los casos a acoger como correctas las interpretaciones que de las normas propongan las partes, tanto demandante como demandado, y (iii) no se hace extensivo a los casos en que al juzgador pueda surgirle incertidumbre respecto de la valoración de una prueba, esto es, la que resulta de defecto o insuficiencia en la prueba de los hechos, dado que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social consagra la potestad de los jueces de formar libremente su

convencimiento y no los sujeta a una tarifa legal de prueba. -Subrayado intencional de la Sala-

Corolario de lo expuesto, y atendiendo a las consideraciones fácticas y jurídicas antes expuestas, se dispondrá por la Sala la confirmación de la sentencia de primer grado, en cuanto absolvió a las demandadas COLPESIONES E.I.C.E., POSITIVA S.A., JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA Y UGPP, de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por parte del señor JAIME ALBERTO PULGARÍN VEGA.

3. COSTAS

De conformidad con el amparo de pobreza que en los términos y para los efectos del artículo 154 del CGP le fuera concedido al señor JAIME ALBERTO PULGARÍN VEGA, no hay lugar a imponer a su cargo condena en costas.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

4. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de julio de 2022 por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por JAIME ALBERTO PULGARÍN VEGA, en contra de COLPESIONES E.I.C.E., POSITIVA S.A., JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA Y UGPP, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUDO: SIN COSTAS en esta instancia.

Lo resuelto se notifica mediante EDICTO, acogiendo el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



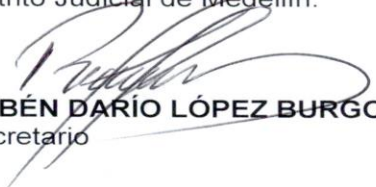
CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario